

Hacienda Foral y Hacienda Autonómica

Mariano Peset Reig

Catedrático de Historia del Derecho



SUMARIO

I. Hacienda Foral

III. Hacienda Autonómica

II. El largo intermedio

Orientación bibliográfica

50

Aun cuando en ocasiones pueda parecer una misma cosa, hay que distinguir entre ambos supuestos. En algunas nacionalidades o regiones que han conservado mejor la tradición histórica —como Navarra o el País Vasco— la coincidencia es mayor: sus viejas haciendas han atravesado los siglos, adaptándose, más o menos, a las realidades o exigencias de los tiempos. En cambio, en Valencia —como en Aragón, Cataluña y Mallorca— la abolición de su legislación específica, tras la batalla de Almansa, derogó sus instituciones públicas, su vieja organización foral. Por lo tanto, durante más de dos siglos no gozaron de autonomía financiera; las autonomías de la constitución de 1931 o las actuales tuvieron que decidir una nueva hacienda, a diferencia de las vascas o navarras... Estas se habían mantenido a lo largo de los años: tras la guerra carlista se hizo su adaptación a la época liberal por la ley de 25 de octubre de 1939 y otras disposiciones de 1841. Con posterioridad a la tercera guerra carlista, la ley de 21 de julio de 1876 y normas concordantes modificaron el régimen de las provincias vascongadas. En todo caso mantuvo, al igual que en Navarra, especialidades en su derecho público y en su sistema de impuestos, por lo que la república en 1931 enlazaría con situaciones históricas.

En suma, hay pues haciendas forales en algunos territorios —singularmente en Navarra, ya que durante el franquismo perdieron sus especialidades las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa—. Las autonomías republicanas se insertaron en ese proceso histórico, mientras que para otros territorios era una creación nueva, por más que podía enlazar con derechos del pasado, derechos forales que estaban derogados en su vertiente pública, aun cuando pudieran servir de inspiración en la nueva etapa o aglutinar deseos y anhelos de aragoneses, catalanes o valencianos...

Por tanto, para Valencia la hacienda foral es un concepto y realidad históricos que se extiende desde los siglos XIII a XVII —su recuerdo todavía está presente entre los valencianos, pero fue transformando por la fuerza de las armas en una nueva organización fiscal—. Este período constituirá la primera parate de mis páginas presentes.

Después —en la segunda parte— estudiaré el largo intermedio que va desde la abolición de los *Furs* hasta la época de las autonomías. Intermedio que tiene dos partes bien diferenciadas, la hacienda borbónica y la hacienda liberal, con la revolución entre ambas. Claro es que se trata de siglos de fuerte centralismo y dependencia, pero si los omitiese perderíamos de vista la continuidad histórica que, sin duda, conviene percibir...

La última parte, se dedica a la autonomía republicana, que, si bien estaba consagrada en la constitución, no alcanzó a implantarse en Valencia. Sólo Cataluña y el País Vasco fueron capaces de aprobar sus estatutos y empezar a andar, aunque la guerra civil segó aquel camino... En Valencia sólo hubo algunos proyectos de estatuto, que estudió con cuidado y publicó Alfons Cucó hace unos años. A través de esos textos creo posible presentar líneas y estructuras de lo que pudo haber sido nuestra hacienda autonómica...

I. Hacienda Foral

Cuando Jaime I conquista Valencia establece un sistema de rentas o impuestos que le permitan el gobierno del nuevo reino. El real patrimonio del monarca quedaría compuesto de una parte del producto decimal —los tercios diezmos—, impuestos sobre el tráfico de mercaderías —la *lezda* o *leuda*—, censos sobre molinos, hornos y tiendas, sobre tierras y casas, etc. Organiza su administración y, de esta manera, puede contar con unos ingresos que le permitirían subvenir a los gastos —si bien, tendrá que recurrir a pedidos de sus vasallos, que, a partir de la aparición de las cortes se conceden como servicio de las mismas al rey...

Con ocasión de la cruzada —tan bien estudiada por J. I. Burns— la santa sede le concedió los diezmos al monarca aragonés. Después éste cedería dos tercios a la iglesia, reservándose el tercio diezmo, como una de sus más importantes rentas o ingresos del nuevo reino... Mientras, en Castilla, el rey conseguía del papa análoga concesión de tercias reales, pero no se conformaba y creaba otros tributos más pingües: las alcabalas o impuesto sobre el tráfico de mercaderías, bastante elevadas para permitirle una hacienda más moderna —las mercancías en sus entradas y salidas pagaban además aduanas o rentas generales—. Mayores ingresos que gravaban el comercio de las ciudades y la circulación de las mercancías, con un tanto de su valor que solía ser el diez por ciento, por alcabalas. Una hacienda más moderna, sin duda, semejante —salvadas las distancias— al modernísimo IVA; sobre todo, una hacienda que producía altos rendimientos y favorecía el poder real...

¿Por qué razones no introdujo impuestos sobre tráfico o circulación análogos el monarca en Valencia o los restantes territorios de la corona aragonesa? ¿Acaso no pudo o no quiso? En verdad, lo intentaría, pero este tipo de impuestos —como también una parte del monopolio de la sal— acabó en manos de la *Generalitat*. En el reino de Castilla se produjo una división de ese producto, ya que, en parte revertía directo a la hacienda real, como alcabala, a no ser que estuvieran enajenadas por cualesquiera apuros del erario público; otra parte, sobre mercancías o productos diferentes, se recargó con la denominación de «millones» y sus resultados servían para hacer el pago del servicio de las cortes castellanas.

En Valencia, según nos ha mostrado Rosa Muñoz Pomer, las cortes realizaron repartos sobre los vecinos para recaudar el dinero prometido al rey. Pero también se aprobaron algunos impuestos para hacer frente al donativo, que afectaban a la circulación de mercancías que, desde inicios del XV, controlaría la *Diputació* o *Generalitat*. Impuestos sobre fabricación o venta de tejidos, oro

52

o plata, esclavos... así como otros muchos, quedarían en beneficio de este organismo, por más que en último término su fin era pagar el donativo al rey, según acuerdo de cortes, suponía por sí una amplia y compleja burocracia —en todo caso, la decisión no estaba en manos del rey—. Esta diferencia con Castilla fue esencial —junto con las parias de Granada hasta su conquista— para explicar la diversa hacienda de ambos reinos. Por un lado, Valencia, o los restantes de la corona catalanoaragonesa, conservan ingresos de tipo patrimonial mayor tiempo, pues no pueden prescindir de ellos; mientras Castilla, que a partir del siglo XVI empieza a recibir los tesoros de las Indias, evoluciona hacia formas más modernas de imposición o una menor dependencia de la real hacienda de rentas de tierras, casas, hornos o molinos, escribanías o notarías, carnicerías, pescaderías, pesos y medidas, aguas, pastos, etc.

Los gastos principales de la hacienda foral valenciana eran salarios de los altos empleados —gobernador, virrey, doctores de la audiencia, baile general, etc.— o mercedes concedidas por el rey, debidas a diversas causas, aparte las pensiones de algunos censales que gravan el real patrimonio...

El real patrimonio o bailía general era una organización existente desde el origen. El baile general es un alto funcionario que tiene a su cargo muy diversas funciones entre ellas, una de las principales, la administración de la hacienda. Una segunda bailía general, en Oriola, administraba los ingresos de aquella zona, que por haberse incorporado a Valencia a fines del XIII y comienzos del XIV —en la campaña contra Murcia de Jaime II— tenía unos ingresos muy distintos, más cercanos a los usos de Castilla, como el almojarifazgo que es un impuesto cercano a la alcabalas.

El baile general tenía jurisdicción absoluta sobre el mar, se encargaba de las armadas reales o del corso, guías y circulación de mercancías y pasajeros, naufragios, etc... La población mora, hasta su expulsión a inicios del XVII, dependía de esta autoridad y su justicia, sin duda por la protección que el rey brindaba al pueblo vencido; juzgaba de sus crímenes y delitos, o vigilaba sus desplazamientos, así como autorizaba su redención... Los esclavos y su liberación también dependían de él —Vicente Graullera lo estudió con detalle—. La otra minoría, los judíos, expulsados antes, también estaban bajo su guarda. El comercio exterior y la paz de los comerciantes era otra de sus funciones, incluso el aprovisionamiento del reino y su capital...

Una serie de empleados u oficiales le ayuda en sus tareas, y para su extensión geográfica existían unas baillías menores que administraban los bienes e impuestos de una ciudad o comarca, bajo su autoridad superior. Llegaron a ser hasta 30 en el siglo XVII.

En suma, delegados del rey, frente al virrey o gobernador, que eran más políticos y militares, los bailes valencianos eran, más bien, empleados administradores y financieros, al par que protectores, en nombre de la corona, de las mi-

norías para evitar que fuesen destruidas o explotadas en exceso. A partir del siglo XV, el mestre racional —primero uno para toda la corona, después sendos para cada reino— fue el magistrado que contabilizó y revisó las cuentas de la bailía, así como de otros organismos con alguna dependencia del monarca. Controló los arrendamientos de rentas reales y censuró cuentas, ayudado por la junta patrimonial. Una disposición de 1573 le deniega su petición de decidir en relación al real patrimonio; su función es contable y de censura, para establecer una gestión separada del control —de análoga manera a como las cortes de Toledo de 1480 establecieron para Castilla contadores mayores y contadores de cuentas—. Por lo demás, el mestre daba cuentas al tesorero real de la situación de la hacienda del reino, de sus ingresos y salidas. En todo caso, no interviene los fondos de la *generalitat*, que como representante de las cortes valencianas, como organismo del reino —no del rey— se revisa a través de una comisión creada en cortes de Monzón de 1542.

Junto al poder del rey y su hacienda, aparecían las cortes del reino como representantes de las ciudades, del clero y de la nobleza. Su actividad legislativa se veía completada por la aprobación de un servicio o donativo al monarca, que, de este modo, completa sus ingresos. La recaudación y administración de los impuestos necesarios para lograr las cantidades, pertenecía a la diputación o generalidad de las cortes, organismo con sus propias funciones, como la defensa de las costas del reino... Creado a inicios del siglo XV perduraría hasta finales del régimen foral...

Estaba formada por seis diputados de los brazos, tres clavaros o administradores y seis contadores para controlar ingresos y salidas. Se elegían por los tres estamentos, mediante procedimientos complejos, insaculación o designación entre los nobles, mientras las ciudades se turnan, con unos fijos para la capital. Aparte tenía gran número de empleados y oficiales, tales como abogados, procuradores, síndicos administradores, etc.

Las cortes, desde 1510 otorgan, en cada una de sus reuniones un servicio de unas 110.000 libras valencianas, más que los ingresos de real patrimonio. Se hace frente a las mismas a través de repartos —cada vez menos frecuentes—, de censales si es necesario adelantar de inmediato el dinero y, sobre todo, impuestos denominados generalidades porque todos pagan. Los impuestos eran variados y se arrendaban a particulares, como es usual en las antiguas haciendas, pues la administración directa proporcionaba menores rendimientos. Abundan los cargados sobre exportación de tejidos de oro, seda y lana; sobre telas, ropas, arroz, madera, seda en rama, oro, esclavos, moneda, bestias, libros, etc. Una parte del impuesto sobre la sal estaba cedida por Fernando el Católico a la Generalitat.

Mestre Racional. Cuentas de administración del año 1570

| | | |
|--|------------|-------|
| Pes real | 1.975 s. | 8 d. |
| Drets de la taula del peatge, quema, leuda de Tortosa, e dels tres diners per liura | 397.580 s. | |
| terç de delme de pa e vi de la horta de la ciutat de Valencia .. | 22.980 s. | 5 d. |
| terç de delme del paper de la hortaliza del horta de Valencia .. | 17.520 s. | 4 d. |
| terç delme del carnatge de la horta de la ciutat de Valencia .. | 6.286 s. | 6 d. |
| Almodi de la ciutat de Valencia | 5.150 d. | |
| Batlía de la moreria de Valencia | 500 s. | |
| Quint del peix de la Albufera a terç del delme del peix de la mar | 37.080 s. | |
| Gabelles de la sal de tot lo present regne | 59.760 s. | 8 d. |
| Panellet de la sal cuyta | 4.429 s. | |
| Alfondech | 4.140 s. | 8 d. |
| Lo camp major dels tiradors | 250 s. | |
| Lo dret del faixar | 1.318 s. | 5 d. |
| Açoch | 61 s. | |
| Censals de la ciutat de Valencia e son terme | 1.322 s. | |
| Censals que son atinent al alfondech del senyor rey | 414 s. | |
| Luysmes y fadigues e entrades de establiments | 1.063 s. | |
| Delmaments e adjutgaments e pasatge de sarrahins | 7.722 s. | 10 d. |
| Composicions e remissions de la Batlía | 1.771 s. | 3 d. |
| Pensions dels censals del General | 14.791 s. | 11 d. |
| Coses vedades tretes per mar y per terra | 4.330 s. | 1 d. |
| Restes del comptes precedents: | | |
| 1567 | 720.607 s. | 2 d. |
| 1568 | 258.862 s. | 4 d. |
| 1569 | 244.532 s. | 3 d. |
| Justicies civils y criminals | 4.973 s. | 5 d. |
| Viles reals: | | |
| Xàtiva | 70.119 s. | 1 d. |
| Morella | 7.638 s. | 7 d. |
| terç delme de Morella | 45.371 s. | 6 d. |
| Sexona | 1.406 s. | 8 d. |
| terç delme de Sexona | 20.188 s. | |
| Algezira | 14.140 s. | |
| terç delme de Algezira | 31.106 s. | |
| Cullera | 40 s. | |
| Castelló | 15.397 s. | 5 d. |
| terç delme de Castelló | 16.480 s. | |
| Burriana | 3.167 s. | 9 d. |
| terç delme de Burriana | 6.087 s. | 4 d. |
| Onda | 533 s. | 10 d. |
| Vila Real | 15.005 s. | 6 d. |
| Vilafames | 150 s. | |

Mestre Racional. Cuentas de administración del año 1570

| | | |
|--------------------------------|--------------------|----------|
| Morvedre | 16.172 s. | |
| terç delme de Morvedre | 16.696 s. | 4 d. |
| Ontinyent | 2.875 s. | |
| terç delme de Ontinyent | 25.142 s. | 3 d. |
| Biar | 2.334 s. | 11 d. |
| terç delme de Biar | 11.453 s. | 7 d. |
| Penáguila | 1.116 s. | 3 d. |
| terç delme de Penáguila | 8.672 s. | 8 d. |
| Bocayrent | 1.824 s. | 11 d. |
| terç delme de Bocayrent | 12.051 s. | |
| Castelfabib | 705 s. | 8 d. |
| Ademus | 400 s. | |
| Alpont | 2.040 s. | 6 d. |
| terç delme de Alpont | 19.580 s. | 4½ d. |
| Liria | 2.680 s. | 11 d. |
| terç delme de Liria | 15.491 s. | 6 d. |
| Fradell | 200 s. | |
| San Matheu | 700 s. | |
| Silla | 150 s. | |
| Museros | 300 s. | |
| Torrent | 150 s. | |
| Çueca | 300 s. | |
| Xerica | 14.292 s. | 6 d. |
| terç delme de Xerica | 10.537 s. | 7 d. |
| Enguera | 200 s. | |
| Vilajoyosa | 889 s. | 3 d. |
| terç delme de Vilajoyosa | 5.160 s. | 3½ d. |
| Alcoy | 6.286 s. | 5 d. |
| terç delme de Alcoy | 16.799 s. | 4 d. |
| Peniscola | 17.036 s. | 3 d. |
| Sumas totales: | | |
| Rebudes | 2.278.494 sueldos, | 1 dinero |
| Dates | 949.374 sueldos, | 9 dinero |
| Resto | 1.329.119 sueldos, | 2 dinero |

FUENTE: Archivo General del Reino de Valencia, Mestre Racional, núm. 176.

* * *

¿Quién pagaba los impuestos en la hacienda foral? ¿Era un sistema proporcional a la riqueza o gravaba más a quien tenía menos? En el antiguo régimen, esta última es la regla. Pero, en concreto, ¿quién era o sobre qué supuestos descansaban las rentas de la hacienda foral?

Si examinamos cualquier año en los libros del mestre racional —véase el extracto adjunto— podemos establecer unas líneas generales. La tesis de doctorado en curso de Jorge Correa me permite hacer buenas precisiones sobre los impuestos del siglo XVII, el último de vigencia de los *Furs de València*. Conforme a su estudio, se pueden distinguir cinco grupos:

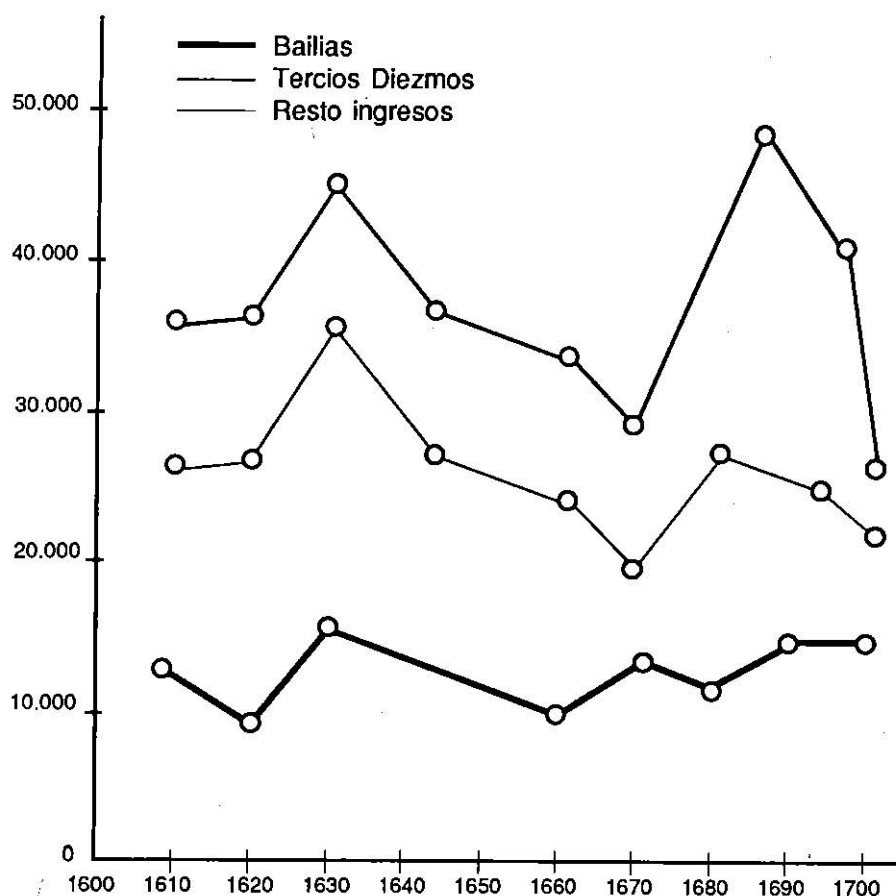
1. Impuestos con un marcado carácter patrimonial, que proceden de épocas muy antiguas y a la altura del seiscientos apenas representan un porcentaje mínimo. Adela Mora ha demostrado hace poco que ya en los cabreves o inventarios de bienes del XVI, este tipo de rentas está muy mermado —las enajenaciones de hornos molinos o de casas y tierras ha erosionado este capítulo—. Quienes disfrutaban de estos bienes pagan un censo al real patrimonio, y la devaluación de los tiempos los reduce a cantidades menores, salvo algún caso de la maquila o derechos de molienda. A veces, en las casas que posee el patrimonio en algunos barrios, se beneficiarían —y pagarían— gentes modestas; en cambio, en los derechos de hornos, molinos... es posible ver que los detentan nobles o algunos notarios.

2. El segundo grupo que establece Correa es el monopolio de la sal, que, en parte, está cedido a la *generalitat*. Consistía, como cualquier estanco, en la producción y distribución de este producto de general consumo y, se añadía, sobre los costes cantidades que permitían buenos ingresos. Su repercusión, sin duda, era general, y su monto significaba ya una buena cantidad, que podría estimarse hacia el diez por ciento.

3. En este orden creciente, hay que citar los antiguos derechos sobre tráfico que tenían el monarca —los más sustanciosos estaban en manos de la *generalitat* de cortes—. La lezda por las mercancías que pasan por el cabo de Tortosa o el peaje en el puerto de Valencia u otros, junto con las licencias de exportación de cosas vedades o diversas cantidades sobre mercancías extranjeras proporcionaban ingresos —nunca comparables a las alcabalas y las rentas generales de Castilla. Las cantidades que se pagan lógicamente se repercutirían en el precio de las mercancías, en un mercado bastante cerrado...

4. En cambio, la mayor parte de los ingresos se basan en el tercio diezmo, sobre los productos agrarios. Los campesinos deben pagar la décima de sus cosechas a la iglesia —a veces más— y, de ésta se detrae la tercera parte —el tercio diezmo— con destino a las arcas reales. Grava pues, el real patrimonio, en su mayoría, sobre las espaldas del campesinado, que se ve despojado de una parte de su producto... Si tenemos en cuenta que otras fiscalidades —en el antiguo régimen no existe una sola hacienda— también están basadas en ingresos análogos, nos podemos hacer una idea clara de la hacienda foral valenciana. La iglesia a través de sus diezmos, la parte que le queda, mientras los señores, absorbían renta —en proporciones muy elevadas en Valencia según

Ingresos. Medias decenales (en libras) **1600 - 1693**



FUENTE: *Libros de Mestre Racional*, Archivo del Reino de Valencia.
Elaboración de Jorge Correa Ballester, inédito cedido para este estudio.

muestra Casey— por ingresos de casas y tierras o por monopolios de horno, molino, almazara, tienda, etc; incluso por tercio diezmo que habían adquirido o recibido del rey.

Había otros tributos reales de menos entidad, como producto de la ceca o casa de moneda, amortización de bienes en manos muertas, etc. Quizá tan sólo el morabatí o una cantidad por cada casa del reino significaba algo más. Por otra parte, no se ha de olvidar el donativo de las cortes que también ingresaba el rey, cuando se le concedía, cantidad muy elevada, que recaudaba, según dije, mediante impuestos sobre circulación de mercancías y sobre la sal, la *generalitat*.

Otra cuestión interesa en este breve examen de la hacienda foral valenciana: ¿se pagaba más o menos que en Castilla? En alguna fuente coetánea en la *Conservación de monarquías*, de Pedro Fernández Navarrete, se planteaba el mayor gravamen de Castilla,

...deviendo como cabeça ser la más privilegiada en la contribución de pechos y tributos, es la más pechera y la que más contribuye para la defensa y amparo de todo lo restante de la *Monarquía*, porque no sólo da para el sustento de la casa real y para asegurar las costas de España, sino también para presidir a Italia, sustentar las fuerzas de Africa, reducir a Flandes y socorrer provincias y príncipes extranjeros... (Madrid, 1626, discursos XXIII, págs. 151-152).

Los estudios sobre la hacienda valenciana no permiten todavía un pronunciamiento definitivo en esta materia —tampoco la hacienda castellana, a pesar de existir valiosos trabajos, se ha superado una primera fase descriptiva que me permita sentenciar la cuestión. Los cálculos que se hacen no son convincentes y deberá esperarse a mejores.

El texto de Navarrete, o en general, lo que sabemos de hacienda castellana, me hace sospechar que, fundamentalmente, esos enormes gastos se sufragaban en muy buena parte con las remesas de Indias... No puede negarse que los impuestos castellanos fueron gravosos y regresivos, pero ¿hasta qué punto no lo eran en los diversos reinos y territorios de la corona hispana? La interpretación de una Castilla desangrada, que se halla en Ranke, ha servido, sin duda, para que los historiadores castellanos, al cantar las glorias de sus tierras, insistiesen en estas ideas. Incluso se ha querido explicar decadencia en el centro y surgir de la periferia como consecuencia de desigualdades fiscales...

Repito que no es posible terminar el problema; hay que esperar a nuevos estudios. Sin saber siquiera los datos más esenciales es preferible no seguir... A veces, se olvida que una parte de los ingresos se destinaba a otras provincias o se omiten importantes capítulos de las rentas que percibía el rey. No quiero negar el sacrificio de Castilla, pero necesito demostraciones antes que ideología...

2. El largo intermedio

Sea porque los monarcas querían dominar bélica y políticamente los estados de la corona aragonesa, o porque una guerra dinástica y social se había despertado en ellos, a inicios del XVIII se abolieron sus fueros. Los levantamientos en favor del archiduque Carlos de Austria en la vertiente mediterránea, enfrentaron estos territorios a Felipe V. Tras la batalla de Almansa, el 25 de abril de 1707, se derogaron los fueros, estilos, usos y privilegios de Aragón y Valencia



y, unos años más tarde los de Cataluña y Mallorca... Todos lograron la devolución de sus normas privadas, salvo Valencia, que dejó de ser un país de derecho foral. En relación a la hacienda, en todos cambió, para adaptarse más al sistema castellano, con una mayor dependencia del rey y desaparición de la autonomía regnícola. Valencia fue inserta en las cortes castellanas a partir de 1709, junto con alguna ciudad de Aragón, mientras Cataluña lo sería en las de 1724. Por tanto, el donativo desaparece, pues las cortes del XVIII ya no gozan de estas facultades de aprobación.

Los diversos tributos de Castilla empezaron a aplicarse en Valencia, algunos sin problema, como son aduanas o el papel sellado, mientras, otros, con mayor dificultad, como las alcabalas. Una nueva hacienda real superpuesta a otra, ya que el real patrimonio antiguo se conservó, aun cuando en algún momento Felipe V pensó en suprimirlo, pues sus rendimientos no eran demasiado. En cambio, la hacienda de la *generalitat* fue desmantelada, pues desaparecidas las cortes no tenía sentido. Se mantuvo algún tiempo, pues su liquidación no era fácil, pero, al fin desapareció... En el XVIII las cortes castellanas no concedían donativos o servicios como en siglos anteriores. Ya a fines del seiscientos la diputación de aquellas cortes se había integrado en el consejo de hacienda, mostrando todo el poder que el monarca tenía frente al reino...

La hacienda castellana estaba basada en tres apartados esenciales, que ahora se aplicarán en Valencia. Eran éstos:

1.^a Rentas generales o de aduanas, que se pagan en los puertos, conforme a arancel, que a fines del XVIII era aproximadamente de un quince por ciento del valor. Junto a éstas se cobran derechos municipales o tasas de puertos, incluso la renta de la lana cuando ésta salía al exterior —hoy nos sorprende que se graven exportaciones, pero es usual en el antiguo régimen al buscar la riqueza donde se encuentre, si bien en este caso podía ser una técnica para asegurar ese pago.

2.^a Rentas estancadas, en donde el papel sellado para los documentos oficiales, se unía a la sal o el tabaco, entre otras. La renta de minas, por la regalía que el rey tenía en ellas, tendría un carácter distinto, como producto de una propiedad especial que tan amplios resultados produjo sobre las Indias, su oro y su plata, o sobre el mercurio de Almadén que se explotaba usualmente por la corona, salvo algunos periodos de arrendamiento de las minas; la importancia del mercurio para la amalgamación y obtención de los metales preciosos hizo de estas un capítulo esencial.

3.^a Las rentas provinciales fueron decisivas para la corona, y suponían la tercera parte de los ingresos. Mientras las anteriores producían otro tanto, las rentas generales se situaban en un quinto. Estaban compuestas las provinciales por impuestos sobre la circulación interior de mercancías, en forma de alcabalas, cientos —un recargo del cuatro, mientras la alcabala es el diez— y los millones, tributo muy análogo sobre bienes que no estaban sujetos por otra razón...

160

La mayoría de los productos estaban sujetos a esta tributación, si bien, por la dificultad de calcular las ventas que se hacían, se recurrió a diversos expedientes, como estimaciones sobre comerciantes o sobre las demás personas o encabezamientos de los pueblos por una cantidad alzada con la real hacienda, que después ellos pagaban con ingresos municipales o con estancos de productos en su recinto. En las grandes ciudades se generalizó el cobro de unos derechos de puertas, que después se pagan, por el municipio, a la real hacienda.

En Valencia o los demás territorios de la corona de Aragón, la introducción de la alcabala, a partir de la nueva planta fue difícil. Era demasiado complicada su recaudación, por lo que se optó por repartimientos de cupos al reino, que se distribuían entre la capital y los diversos pueblos; éstos, a su vez repartían con arreglo a la riqueza agraria o urbana, estimando una renta y distribuyendo el cupo asignado... ¿Esto significaba el pago de las clases o estamentos dominantes? La iglesia fue expresamente exceptuada de este pago por equivalente de alcabalas; la nobleza no, pero se vio liberada, ya que se cargó sobre quienes tenían propiedades en enfiteusis y no sobre los señores que tenían el dominio directo... De otro lado, en la ciudad de Valencia, pronto se transformó en un derecho de puertas, con lo que la nobleza que tenía bienes en los realengos pudo evitar esos pagos...

La iglesia y la nobleza fueron clases exentas en el antiguo régimen. Apenas pagaron las cargas del estado, aun siendo quienes poseían las mayores riquezas. Las instituciones eclesiásticas tan sólo consintieron en dar algunos de sus impuestos —recuérdese el tercio diezmo— o donativos en determinados momentos. La nobleza pagaba alguna contribución por transmisión de sus títulos o un servicio llamado de lanzas, por no tener ya, en la edad moderna, obligación de acudir al servicio en el ejército —por más que los mandos eran nobles, pero no era obligación general como antaño en la edad media.

Cuando a mediados del XVIII el marqués de la Ensenada pretende instaurar la única contribución, sobre un catastro de riquezas que englobase a los estamentos dominantes, la oposición fue fortísima y no fue posible implantarla... Era menester que llegara la revolución para cambiar el sistema de la hacienda castellana.

* * *

Fontana —nuestro mejor estudioso de la hacienda liberal— señalaba que el cambio de las reformas liberales no fue mucho. Las rentas provinciales desaparecieron, sin duda, sustituidas por impuestos sobre consumos que no eran demasiado distantes de las alcabalas. Se introdujo, en la reforma Mon de 1845, la contribución territorial rústica y urbana, pero no significó más allá de un 20 por ciento del total. Las transformaciones en las finanzas públicas son siempre lentas, pausadas, pues el poder no puede quedarse sin sus bases económicas.

Es verdad que los postreros momentos del antiguo régimen y las convulsiones liberales produjeron situaciones de penuria que se compensaron con fuertes emisiones de deuda —ya iniciadas con Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808)—. Pero hubo una cierta continuidad, una reforma muy moderada... Luego, paulatina, fue cambiando la hacienda pública, su organización se hizo más moderna, con nuevos impuestos como el impuesto de utilidades de Fernández Villaverde en 1899 o la progresiva eliminación de los impuestos sobre consumos que se atribuye a Flores de Lemus. Pero no se trata de exponer un breve esquema de estas variaciones, sino resaltar las características de estos años.

La hacienda hispana fue, sin duda, una organización centralizada, por más que los intendentes, instituidos a inicios del setecientos, pudieran tener facultades —eran simples delegados del centro—. Otra gran línea de esta hacienda es que establece, a partir del XIX, una administración presupuestaria, más racional... Cada vez es más amplio el sector de gestión directa, frente a arrendamientos de rentas; cada vez más elevados sus montos —además de la desamortización del XIX—. Las haciendas locales, diputaciones y ayuntamientos, apenas representan una mínima parte del dinero público... El carácter regresivo de los impuestos —a pesar de las declaraciones de proporcionalidad que existen en las constituciones— es otra de las características de nuestra hacienda...

Apenas hubo intentos de descentralización regional en este largo intermedio. La constitución republicana federal de 1873 podía haber sido una vía, pero no llegó a implantarse. La mancomunidad catalana, establecida en 1912, fue suprimida por la dictadura en 1923. La hacienda española es muy centralizada a lo largo de estos años, todo depende de la administración central —municipios y diputaciones apenas significan en el conjunto total.

3. Hacienda autonómica

Los movimientos regionalistas y nacionalistas habían comenzado desde fines del siglo XIX. Junto con los movimientos obreros, anarquistas y socialistas, habían puesto en duda la estructura del estado liberal... Años largos de zozobra en que no se encuentra el camino hacia un entramado que permitiese vivir en paz a los españoles, que equilibrase aspiraciones y deseos o que sancionase una sociedad más justa. La solución de Primo de Rivera no pudo lograr sino un paréntesis basado en la fuerza, como después ocurriría con la guerra civil y la dictadura de Franco...

La II república, en cambio, proporcionó un modelo nuevo de autonomía y descentralización, que, desgraciadamente, se vio cortado por la guerra. Parte, porque las fuerzas tradicionales no estaban dispuestas a ceder en éste y otros

sectores —querían un poder fuerte que asegurase sus intereses—. Parte, por unirse los conflictos de España a los de Europa de aquellos momentos, que enfrentaba a las democracias occidentales con el nazismo y el fascismo...

La constitución de 1931 señaló el cauce para los sentimientos regionalistas, con posibilidades de organización política autónoma. El art. 8 preveía organizar el estado español a través de municipios mancomunados en provincias y regiones, constituidos en régimen de autonomía. «Si una o varias provincias limítrofes —establecía el artículo 11—, con características históricas, culturales y económicas comunes acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentarán su estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12». Y continuaba después: «Una vez aprobado el Estatuto, será Ley básica de la organización político-administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico». Para aprobar el estatuto se requería: la propuesta de al menos dos tercios de los ayuntamientos de la región, la aceptación de las dos terceras partes de los electores y la ulterior aprobación de las cortes, siempre que no tengan preceptos contrarios a la constitución ni a las leyes orgánicas del estado. Se prohibía la federación de regiones autónomas y se determinaban las competencias exclusivas del estado en las diversas materias (arts. 14 a 18).

Valencia quiso seguir esta vía y quiso tener su estatuto, aun cuando no lograría verlo aprobado, como Cataluña o el País Vasco, ni siquiera como Galicia... ¿Menor fuerza del regionalismo valenciano? Más bien problemas internos entre los diversos partidos políticos existentes en aquellos momentos. El republicanismo se dividió. Los radicales blasquistas del ayuntamiento se ocuparon del asunto desde inicios de la república, resaltando la personalidad valenciana e invitando a formar una comisión que recabaría ayuda de Alicante y Castellón. El día 11 de julio de 1931 estaba redactado el anteproyecto. Pero los radicales de Castellón y Alicante temían verse desbancados por Valencia y se apartaron pronto. Samper propondría en la asamblea de diputados y regidores valencianos una solución mínima: aprobarlo para Valencia provincia y los pueblos de las otras que quisieran sumarse; aunque se aprobó esta propuesta quedó estancado el estatuto valenciano.

Aquel proyecto de estatuto organizaba el poder —el *Govern de la Regió valenciana*— a través de una asamblea unicameral y un *Consell* ejecutivo. La *Assamblea*, que recibiría el nombre de *diputació de la Generalitat*, se habría de elegir 125 por sufragio universal directo de mayores de edad, «sense distinció de sexes», y 75 por designación de corporaciones. De estos 75 diputados, 50 serían «*triats per les Associacions obreres, patronals, Cambres de Comerç, Indústria i Navegació, Agrícoles, etc. i els 25 restants per Associacions culturals, Universitats, Instituts, Normals, Col·leges d'Advocats, Procuradors, Metges, Apotecaris etc.*» (Art. 20). El *President de la Regió* sería elegido por la asam-

blea, por mayoría absoluta, y, a su vez, designaría las nueve personas que han de constituir el *Consell*: seis de ellas diputados, dos por cada provincia, y los tres restantes libremente (art. 25). Prescindiré de competencias y funcionamiento, para ceñirme a la hacienda autonómica que se preveía y regulaba en el título VI.

En el capítulo de hacienda se tenía una idea vaga de qué iba a ocurrir en el futuro. En principio, el estatuto valenciano de 1931 se reservaba como ingresos la contribución de utilidades —hoy diríamos impuesto sobre la renta— por entero, y, en caso de que no fuese suficiente solicitaría del poder central el impuesto de derecho reales o transmisiones patrimoniales *inter vivos* y *mortis causa*, en todo o en parte.

Article 14. Correspondra al Govern de la Regió Valenciana les contribucions directes que graven les utilitats dins del territori de la Regió, qual Govern tindrà plena llibertat per a fixar la quantia i per a organitzar-les.

El Govern regional podrà establir impostos sobre el consum de gasolina per a l'entreteniment de les carreteres.

Si el Poder regional no poguera atendre les matèries a ell reservades amb els dits ingressos, procediria cedir, prèvia aprobació del Parlament espanyol, de tot o part de l'impost sobre drets reals.

Se percibe inseguridad en esta propuesta, con un impuesto que se «regionalizaría», mientras los otros nombrados son sólo posibilidades para un futuro que no está del todo diseñado. En los artículos siguientes se perciben otras cautelas.

Article 15. Sempre que de la liquidació dels presuposts generals de l'Estat resulte que els gastos d' éste fora de la Regió Valenciana en aquelles matèries reservades en el nostre territori al poder regional siguen inferiors al producte, també fora de la Regió, de les contribucions que segons l'article anterior es reserven al poder regional, l'Hisenda del poder autonòmic abonarà a l'Estat espanyol una part proporcional de la diferència. En atre cas serà l'Hisenda general la que abonarà a la Regió Valenciana la dita part proporcional.

Era un intento de establecer cierta compensación con otras regiones, una ayuda mutua... Quiere ser una aportación, en el caso de déficit estatal en las materias e impuestos que se ceden. En todo caso, no muy acertada, pues dependía de los ingresos y de los gastos... Análogo sentido posee el artículo siguiente en que se consideraba responsable el poder regional de la parte proporcional que le correspondía por la deuda pública del estado español...

Era curiosa su posición ante el sistema de cupo que regía en las provincias del norte. Ahora el interés apenas se vela por alguna reserva: si es posible un sistema de cupo, Valencia quería adoptarlo. Decía el art. 18: «Sent els concerts econòmics i mancants d'elasticitat, no vol amparar-se en ells la Regió Valenciana, pero si qualsevol altres terres d'Espanya fruïren de dit privilegi, es suspen-

drà la vigència dels anteriors articles i la nostra Regió demanarà acollir-se al règim de cupo o concert».

O sea que, en definitiva, prefería una administración propia de los tributos y el pago de un cupo al estado central... Hay, por tanto, una postura abierta a cualquier cambio, pues no se sabe con certeza cuál va a ser la postura del estado central o los logros que va a permitir a las distintas autonomías.

En 1932, con el estatuto catalán pueden verse cosas más concretas en esta vía de financiación de las autonomías. En su artículo 16 se establecía

- La Hacienda de la Generalidad de Cataluña se constituye: a) Con el producto de los impuestos que el Estado cede a la Generalidad. b) Con un tanto por ciento en determinados impuestos de los no cedidos por el Estado. c) Con los impuestos derecho y tasas de las antiguas diputaciones provinciales de Cataluña y con los que establezca la Generalidad.

Unos principios claros que se completan con numerosas reglas, en que no he de entrar. Se cedía la contribución territorial, rústica y urbana, con sus recargos, debiendo abonar lo que corresponda a los ayuntamientos; el 20 por cien de propios, 10 por cien de pesos y medidas, 10 por cien de aprovechamientos forestales, el canon de superficie y el impuesto sobre explotaciones mineras; el impuesto sobre derechos reales, personas jurídicas y transmisiones patrimoniales; y, por último, una parte de las contribuciones industrial y de utilidades, que baste para hacer frente a los servicios trasferidos, siempre que no pase del 20 por ciento, pues en este caso se abonaría del impuesto del timbre. Por su parte, la generalidad podía establecer nuevos impuestos siempre que no se apliquen a materias que ya tributan en Cataluña a la República, y en ningún caso sobre la renta que será un tributo del estado... Puede emitir deuda interior... En fin, se estaban haciendo unas trasferencias y, naturalmente, las cosas están bastante más perfiladas que en el proyecto valenciano.

En el estatuto vasco el detalle era menor. Tal vez en 1936 se consideraba innecesario precisar en el estatuto tantas minucias. Bastaba con unos cuantos principios en los diversos núcleos de decisión acerca de la nueva hacienda:

1.º Los servicios que, en virtud del presente Estatuto, son transportados al País Vasco, serán dotados en cuantía equivalente al costo exacto de los mismos, con recursos que hoy pertenecen a la Hacienda del Estado.

2.º El costo de los servicios y la determinación de los recursos transferidos se fijará en acuerdo del Gobierno de la República con el Poder ejecutivo del País Vasco...

3.º Los derechos del Estado en el territorio del País Vasco, relativos a montes, minas, aguas, caza y pesca o al fomento de la riqueza nacional, pasarán a ser propiedad del País Vasco...

Y seguía con otros puntos concretos, como la deuda o el respeto a las haciendas locales. En el artículo 13 se recordaba que «Alava, Guipúzcoa y Vizcaya continuarán haciendo efectiva su contribución a las cargas generales del estado en la forma y condiciones sancionadas con fuerza de ley por las Cortes constituyentes en 9 de septiembre de 1931». Es decir, seguían teniendo su hacienda foral.

Mientras, el anteproyecto valenciano había quedado arrinconado al no encontrar apoyo en otras provincias, en otros partidos. Temían el predominio de la Unión republicana autonómica, el viejo partido ahora dirigido por Sigfrido Blasco. La Acción valencianista republicana —con mayor tono nacional— publicaba en septiembre de 1932 un enérgico manifiesto en donde expresaba el desencanto ante las actitudes blasquistas y convocaba en octubre una asamblea o reunión de partidos, en que acuerdan reconstruir la unidad valenciana con sus tres provincias, realizar una activa propaganda y nombrar una comisión que uniera a todos en la redacción de un estatuto. El partido de Unión republicana autonomista no asistió —*El Pueblo* su periódico se consideraba ofendido y contrario—. La Derecha regional valenciana, la otra gran fuerza política, estimaba que nada había de hacerse de espaldas al blasquismo, sin contar con las mayorías... Los anarquistas también se pusieron enfrente: no querían política, no querían estatuto...

En noviembre de aquel año la Unión republicana convocaría una asamblea de alcaldes de los ayuntamientos que dominaba, junto con los de Derecha regional —es decir un movimiento de los dos grandes partidos—. Se inicia una amplia campaña autonomista, pero el triunfo en las urnas no supuso que derecha y radicales impulsasen el proceso. Por su lado, los grupos valencianistas o regionalistas no lograban acuerdos separados por diferencias de criterios entre sus componentes de derecha e izquierda... De nuevo queda detenido el proceso.

Las elecciones de 1936 y el estallido de la guerra volvieron a plantear la necesidad del estatuto. Los ayuntamientos de Valencia, Castellón y Alicante están bien dispuestos y los delegados del Frente Popular se manifiestan favorables; se propuso una nueva asamblea, pero la guerra cortó la posibilidad. De nuevo se abre la discusión sobre el estatuto, apoyado ahora con denuedo por los anarcosindicalistas y por Esquerra republicana, fundamentalmente. Para orientarse sobre las distintas ideologías en liza que se pronuncian sobre el estatuto, nada mejor que el libro de Cucó, *El valencianismo político (1874-1939)*. En el año 1937, en tres meses, se publicarían tres anteproyectos de estatuto, que han sido publicados y estudiados por el mismo Cucó. En enero el proyecto cenetista, en febrero el de Esquerra y en marzo, Unión republicana nacional. De nuevo —una vez más— los diversos grupos partidarios del estatuto veían soluciones diferentes...

66

Los sindicalistas de la CNT empiezan a interesarse por la autonomía —en general por la política— tardíamente. Con el inicio de la guerra participan en el comité ejecutivo popular que sustituye a las vacilantes autoridades republicanas se realizan algunas colectivizaciones de industrias y tierras y se crea un consejo de economía en noviembre de 1936, mientras reivindicaban la autodeterminación de la región valenciana. El gobierno Largo Caballero reorganizó el poder de la república, lo que provoca encendidos deseos de autonomía por parte de los anarcosindicalistas, hasta publicar su proyecto en el periódico *Fragua*, en forma de diez bases para redactarlo, para establecer la autonomía de las tres provincias valencianas, más Albacete y Murcia. El poder se estructuraba con delegados de las organizaciones sindicales que formaban una asamblea; deberían reunirse representantes de CNT y UGT y determinar como debe elegirse, y designar un presidente, quien a su vez nombra sus consejeros. El poder pues estaría en los sindicatos.

Dejaré la descripción de este proyecto —puede acudir a Cucó, *Recerques* 2 (1972) 209-215 —y me centraré en cómo veía la hacienda autonómica. Desbordaba el marco constitucional, pues pide la transferencia del «producto de todos los impuestos, creados o por crear, derechos y tasas, rentas y administraciones de bienes y servicios y, en general... todos los ingresos obtenidos a través de los organismos o entidades públicas que existan en el país». Se administraban y recaudan por los municipios y se contribuye, con las demás regiones, a las cargas generales del estado, en proporción a los servicios que ha de atender. En esta materia financiera, como en otras partes del proyecto, no se ciñen a los preceptos de la constitución; se trataba de un poder revolucionario, nuevo, que recaba extensas parcelas para sí...

Más moderado es el anteproyecto de Esquerra republicana que, en muchas partes, es trasunto del estatuto vasco. Como todavía no entraba en vigor, estaba abierto y, antes de recoger casi a la letra los principios que he señalado en el estatuto vasco, señalaba que la región autónoma podrá adoptar el sistema tributario que le parezca justo y conveniente... (art. 15). Pero ¿cómo iban a lograr más precisiones en escritos que se hacían en el fragor de la guerra? Eran instrumentos de entusiasmo, más que técnicos, para un gobierno ulterior. Por esta razón no es demasiado interesante lo que nos dicen de la futura hacienda: o mejor, no está demasiado meditado...

El tercer proyecto de estatuto de autonomía fue propuesto por la Unión republicana nacional, en 5 de marzo de 1937. Según Cucó pretendía unir las propuestas anarquistas y las posturas más liberales y burguesas para conseguir acuerdo. El poder estaría en una asamblea elegida por sufragio universal, aunque pudiera existir otro organismo formado por las representaciones de los sindicatos, como consultivo. El ejecutivo estaría en manos del presidente, mientras una justicia mayor organizaría los tribunales y jurados, tendría veto de incons-

titucionalidad... En hacienda determinaba con cierto cuidado el patrimonio y los ingresos.

El patrimonio sería, según su artículo 18:

- a) Los bienes, impuestos, tasas, derechos y fundaciones que pertenecían a las antiguas diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia.
- b) Los bienes de uso público situados en territorios regionales y destinados al servicio del estado y los derechos del mismo que sean transferidos por el presente estatuto a la región autónoma.
- c) El producto de los impuestos que le cede el Estado y las participaciones y compensaciones que le sean reconocidos a la región valenciana para cubrir el coste de los servicios descentralizados.
- d) Los bienes procedentes de las herencias intestadas a que se refiere el art. 956 del código civil cuando el causante tuviere reconocido la regionalidad valenciana con arreglo al presente estatuto.
- e) El importe de las nuevas contribuciones y el que resultare de una nueva organización fiscal de la hacienda pública.

Y después señalaba los impuestos y contribuciones que quería que se le cediesen: la contribución territorial rústica y urbana, pasando sus recargos a los ayuntamientos, el canon de superficie y el impuesto que grava las explotaciones mineras, un impuesto de timbre regional, el impuesto de pagos y una parte de propios, aprovechamientos forestales, pesas y medidas, etc. La hacienda regional recaudaría sus propios ingresos, impuestos y demás arbitrios (arts. 18 a 24).

En fin, tres estatutos diferentes que junto con el proyecto de 1931 nos hablan de un esfuerzo, de un entusiasmo que no fue posible realizar. La guerra civil retardó las cosas por muchos años... Hoy las haciendas autonómicas, conectadas o no a una tradición foral, buscan mejorar la administración al descentralizar y administrar, más de cerca, con mayor conocimiento de las realidades en torno, los bienes públicos. No se trata de volver a situaciones pretéritas, sino moverse en la más moderna racionalidad. Sin embargo, tampoco hay por qué renunciar al pasado que manifiesta, en su analogía de algunos rasgos, con su hacienda descentralizada, aspectos positivos: nos sentimos más cerca de ideas forales y de autoorganización de núcleos más reducidos que del mundo liberal del siglo XIX —aunque haya pasado mayor número de años.

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA

La hacienda foral valenciana está basada en J. I. Burns, *El reino de Valencia en el siglo XIII: (Iglesia y sociedad)*, 2 vols. Valencia, 1982; L. Piles Ros, *Estudio documental sobre el bayle general de Valencia, su autoridad y jurisdicción*, Valencia, 1970; M. Peset, V. Graulle-

68

ra, «Las instituciones del Reino de Valencia», *Nuestra historia*, IV, 1980, págs. 119-132; J. Martínez Aloy, *La diputación de la generalidad del reino de Valencia*, Valencia, 1930; M.^a R. Muñoz Pomer, *Orígenes de la Generalidad Valenciana*, Valencia, 1987. Sobre el mestre racional está la tesis de Tomás de Montagut, leída en Barcelona, y, en general, sobre hacienda del siglo XVII, la tesis en preparación de Jorge Correa Ballester, a quien agradezco haberme dejado consultar sus materiales y haberme proporcionado sugerencias. También a Adela Mora, que me ha dejado leer su estudio inédito sobre el cabreve de 1488 del real patrimonio.

Acerca de la mayor o menor presión fiscal C. Viñas Mey, *El problema de la tierra en la España de los siglos XVI-XVII*, Madrid, 1941, págs. 79-102, con afirmaciones muy ideológicas.

Para la hacienda castellana antigua, A. Domínguez Ortiz, *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1960; y *Política fiscal y cambio social en la España del siglo XVII*, Madrid, 1984; M. Ulloa, *La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Roma, 1963, 2.^a edición Madrid, 1977; R. Carande, *Carlos V y sus banqueros*, 3 vols. Madrid, 1943-1967.

Su aplicación a Valencia, M. Peset, «La ciudad de Valencia y los orígenes del equivalente», *Una oferta científica iushistórica internacional al Dr. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria*, ed. de M. J. Peláez y J. Fernández Viladrich, Barcelona, 1985, págs. 321-344; J. Correa Ballester, *El impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia*, Valencia, 1986.

Sobre hacienda liberal remito a los estudios de J. Fontana, *La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820. La crisis del antiguo régimen en España*, Barcelona, 1971; *Hacienda y estado en la crisis final del antiguo régimen español, 1823-1833*, Madrid 1975 y *La revolución liberal (política y hacienda, 1833-1845)*, Madrid, 1977.

Acerca de los proyectos de estatuto de la república, el libro de A. Cucó, *El valencianisme polític, 1874-1936*, Valencia, 1971, el proyecto de 1931, págs. 383-390; traducción castellana 1977, sin los apéndices, pero ampliado a la guerra. Los otros han sido también publicados por él: «L'ánarcosindicalisme i l'Estatut d'autonomia del país valencià (1936-1939)», *Recerques* 2 (1972) 209-215; «La problemàtica de l'Estatut valencià durant la guerra civil: l'Avantprojecte d'Esquerra republicana valenciana (1937)», *I Congreso de historia del país valenciano*, tomo IV, Valencia, 1974, págs. 727-739; «La problemàtica de l'Estatut valencià durant la guerra civil: el projecte d'Unió republicana», *Arguments* 3 (1977) págs. 277-242. Sobre esta época remito a su edición castellana, *El valencianismo político (1874-1939)*, Barcelona, 1977, págs. 202-242 y a mi estudio introductorio «Antecedentes históricos. Valencia desde la época foral a la segunda república» en R. Martín Mateo, *Comentarios al estatuto de autonomía de la comunidad autónoma valenciana*, Madrid, 1985, 1-44, en especial 24-44.